

## **Los niveles múltiples de la conflictividad laboral en la industria gráfica (1966-1976): una aproximación analítica**

Pablo Ghigliani

.....

Los estudios generales sobre el movimiento obrero de los años sesenta y setenta en Argentina muestran que la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) tuvo un papel destacado tanto en las luchas contra la dictadura de la Revolución Argentina como contra el Acta de Compromiso Nacional que cimentó la política de concertación social del tercer gobierno peronista (James 1990; Jelín 1977; Löbbe (2006); Schneider 2006; Torre 1983; Werner y Aguirre 2007). Como consecuencia, lo político se enlazó con lo gremial de modo explosivo, potenciando la conflictividad en la industria y enfrentando al sindicato con el estado: en 1969, una dictadura intervino a la FGB por varios meses; en 1974, un gobierno elegido por el pueblo la liquidó reemplazándola por el Sindicato Gráfico Argentino (SGA), un retoño de las 62 Organizaciones.

Lo cierto es que entre 1966, cuando vuelve a la conducción del gremio el peronismo gracias al triunfo de la Lista Verde encabezada por Raimundo Ongaro, y el golpe de 1976, intensos conflictos laborales convulsionaron las relaciones sociales de producción en la industria gráfica. Algunos, prolongados y con gran repercusión pública, como la huelga que a comienzos de 1969 paralizó Fabril Financiera, la empresa más importante de la rama. Otros, tanto o más espectaculares pero con menos prensa, como las ocupaciones que espantaron a los empresarios del sector a principios de los setenta. La mayoría, naturalmente, transitó los carriles habituales: trabajo a reglamento, cortes de horas extras, paros parciales, huelgas cortas.

El dramatismo de los acontecimientos vividos por el gremio en la época incita a un estilo narrativo *in crescendo* que parangone el ritmo de los hechos más salientes (la formación de la CGT de los Argentinos, la huelga de Fabril, las tomas, el plan de lucha de 1974) hasta el trágico desenlace final (la intervención; la cárcel de varios de sus principales dirigentes y activistas; la organización clandestina del resto; el asesinato del hijo de Ongaro; su encarcelamiento, posterior liberación y exilio). Una estilización de este tipo

puede ser atrayente y persuasiva, pero no deja de basarse en un método selectivo caprichoso, que corre el riesgo de disipar la historia social de la clase en un cúmulo de eventos discretos unidos más por el relato que por el análisis.

La metodología seguida aquí es más tediosa. Su objetivo: elaborar un cuadro lo más completo posible de la conflictividad obrera que reponga los vasos que comunicaban las grandes luchas con las disputas cotidianas, la sede sindical con la vida en los talleres, las demandas políticas con las gremiales.

### *La lucha cotidiana por el control de la venta y el consumo productivo de la fuerza de trabajo*

El principal escollo para el estudio de las disputas cotidianas entre capital y trabajo en una rama determinada de la industria es de tipo documental. Mientras que los diarios permiten aún con sus limitaciones seguir la trama de los conflictos que alcanzan estado público (Izaguirre y Aristizábal 2000; Jelín 1977; Nievas 1999), la investigación de las perennes tensiones entre capital y trabajo en las plantas requiere de otras fuentes.<sup>1</sup> Según distintas informaciones, Capital Federal y municipios vecinos, albergaban unos 1500 talleres en los que trabajaban alrededor de 22000 personas. El discurso gremial refería habitualmente que el grueso de la fuerza de trabajo se ocupaba en unos 500 talleres. Como sea, el único modo de acceso sistemático a este heterogéneo universo, compuesto por cientos de pequeños y unos pocos grandes establecimientos, son las publicaciones y documentos sindicales, en especial, *El Obrero Gráfico*; también *Memorias y Balances*, y suplementos ocasionales como *Testimonios* y *Organización*. Ellos contienen, aunque no siempre, informes de la Secretaría de Organización que permiten la compilación de cinco registros para el período transcurrido entre 1967 y 1975 que son de utilidad para esta tarea.

Primero, la cantidad de gestiones directas (GD) realizadas por la Secretaría de Organización de la FGB en las empresas del sector a raíz de una demanda insatisfecha o un conflicto. Por lo general, estas GD eran el producto del fracaso de las negociaciones

---

<sup>1</sup> Es clásica la discusión sobre el subregistro (Ghigliani 2009; Velden 2007). Por ejemplo, una fuente de información exhaustiva como *Documentación e Información Laboral* (sobre esta publicación ver Dawyd y Nassif 2013) registra 41 talleres gráficos en los que se produjeron interrupciones a la producción motivadas por conflictos laborales en el período 1966-1976. En la base aquí construida, este número asciende a 73. Si medimos eventos en lugar de talleres, el registro se ubica holgadamente por debajo del 50 % del total relevado en este estudio.

entabladas por la comisión interna o los delegados, quienes entonces concurrían al sindicato, o del pedido de grupos de trabajadores sin organización de base.

Segundo, las audiencias de conciliación (AC) entre sindicato y empresa con el arbitrio del Ministerio de Trabajo. Por lo común, estas AC sucedían a GD malogradas, pero no necesariamente, como en los registros vinculados a conflictos por despidos o huelgas levantadas a causa de la conciliación obligatoria. En agosto de 1966, la dictadura legisló la obligatoriedad del arbitraje estatal en los conflictos colectivos entre capital y trabajo (Campos 2008), disposición prorrogada sucesivamente hasta diciembre de 1973 y ratificada legalmente por el tercer gobierno peronista en enero de 1974 (Jelín 1977). La ausencia de información sobre años anteriores y la distancia existente entre las disposiciones legales y las prácticas sociales, impiden medir el impacto de la legislación sobre el número y la dinámica de las AC. Lo que se desprende de la documentación es que la gran mayoría de las AC no fueron precedidas por interrupciones de la producción causadas por medidas de fuerza.

Tercero, las actuaciones de los funcionarios de la Policía de Trabajo (PT) a partir de una denuncia concreta, en su inmensa mayoría, por la violación patronal del convenio colectivo de trabajo o el incumplimiento de leyes laborales.

Cuarto, las actuaciones de los funcionarios de la Dirección General de Higiene y Seguridad en el Trabajo (DGHyST), también a partir de las denuncias efectuadas por la FGB, en este caso, por deficiencias en las condiciones sanitarias y edilicias de las empresas.

Quinto, las asambleas que las trabajadoras y los trabajadores de los talleres (AS) realizaron durante el período en la sede gremial. Por regla general, cuando ello ocurría era porque el conflicto había alcanzado cierta envergadura. Un caso especial lo constituyen las asambleas para la formación de comisiones internas o la elección de delegados en talleres sin organización que para evitar las represalias solían llevarse a cabo en la sede del sindicato.

Para una mejor ponderación de los alcances y límites de la base de datos es oportuno señalar que el gremio estuvo intervenido entre el 30 de junio de 1969 y el 24 de abril de 1970 y que el Ministerio canceló en 1974 la personería gremial (agosto) y jurídica (octubre) de la FGB, las que fueron otorgadas en diciembre a una nueva entidad, el SGA. Además, la información es incompleta porque faltan datos sobre alguno de los cinco rubros

para el año 1967; los dos últimos meses de 1971; mayo, octubre, noviembre y diciembre de 1973; y no dispongo con ningún tipo de información para los meses de abril y mayo de 1972 y junio y julio de 1974.

En total suman 2091 registros. Todos contienen el nombre de la empresa en cuestión y la fecha de referencia (exacta la inmensa mayoría de las veces, o en su defecto, el año). Para el caso de las GD (537 registros), las PT (229) y la DGHyST (56) la base especifica los motivos que originaron las acciones; en el caso de las AC (684) y AS (585), solo de modo muy parcial y con escasísima desagregación.

La información estadística brindada por el gremio en la *Memoria y Balance* de 1973 permite aproximarnos a la representatividad de la base. Dicha publicación afirmaba que entre el 13 de noviembre de 1966 y el 31 de diciembre de 1973 se realizaron 2100 GD, mientras que la base contiene para idéntico período 456 registros. También señalaba la publicación que el gremio había participado en 840 AC, la base registra 542; y que se llevaron a cabo 756 asambleas de personal de las que contamos con información sobre 493. La mayor distancia existente en los guarismos del ítem GD lo explicaría el hecho de que la publicación agrupó a las GD propiamente dichas, esto es, las llevadas adelante por la Secretaría de Organización a pedido de las trabajadoras y trabajadores de los talleres, junto a una cantidad indiscernible de reuniones de Secretaría General y de Secretaría de Prensa. En síntesis, a pesar de sus vacíos e imprecisiones, esta base es el único medio del que dispongo para una investigación global de las disputas cotidianas en los talleres.

Un simple análisis cuantitativo evidencia el extenso radio de acción de la FGB. La base registra acciones en 527 talleres, que salvo excepciones, conciernen a demandas generadas en los lugares de trabajo; un universo heterogéneo que engloba tanto a los grandes establecimientos como a los numerosos *boliches* que inundan la rama y que emplean menos de cinco trabajadores. La comparación de los cocientes que resultan de la división del número de registros *por* el número de establecimientos que componen cada uno de los cinco ítems relevados refleja esta heterogeneidad: las AS (3,52) y las AC (3,07) prácticamente doblan a las GD (1,68) distanciándose aún más de los resultados correspondientes a las PT (1,37) y DGHyST (1,29). Los primeros dos índices comprenden a los talleres grandes y medianos con comisiones internas estables y consolidadas, al grupo que se organizó a lo largo del período y al puñado que se vio envuelto en conflictos

defensivos para impedir el vaciamiento. Por el contrario, la inmensa mayoría de los pequeños e ignotos talleres aparecen solo en los registros de las dos últimas categorías; imposibilitados materialmente de generar organizaciones de base que equilibren las relaciones de fuerza en las plantas, todo indica que acudían entonces al sindicato para canalizar sus demandas vía denuncias administrativas que procuraban apoyo estatal.

Además, 44 empresas se distinguen del resto por la frecuencia y cantidad de sus registros; son aquellas que cumplen con dos condiciones: un mínimo de siete registros en alguno de los ítems GD, AC o AS y un piso de diez en total. De éstas, 27 empresas sobresalen por la distribución temporal de estos eventos: cuentan con registros en al menos siete de los nueve años relevados. Las restantes son empresas en las que esta distribución es menor (registros en al menos cuatro años) o en las que alguna situación conflictiva puntual provocó la concentración temporal de las acciones (y por tanto alcanzan los siete registros en alguno de los rubros en cuestión, pero concentrados en el tiempo y sin llegar al piso de diez en total). De este último universo forman parte algunos de los talleres que animaron los conflictos abiertos más virulentos del período pero cuya organización era endeble, o inexistente, antes del triunfo de la Lista Verde.

La base también permite clasificar y describir brevemente las demandas que motivaron todas estas acciones. Tomadas en su conjunto trazan el mapa de las disputas cotidianas entre la patronal y el sindicato por el control de la venta y consumo productivo de la fuerza de trabajo en la industria gráfica. La frontera la fijaban idealmente las leyes laborales, los convenios colectivos y los acuerdos locales formales e informales. Sus vaivenes concretos, sin embargo, obedecían en última instancia a las relaciones de fuerza entre las clases, aunque era muy alta la variabilidad entre las situaciones específicas de los distintos talleres según el tamaño de los mismos y el grado de organización de los trabajadores, o si se prefiere, de acuerdo a relaciones de fuerza localizadas.

Cada registro puede incluir múltiples reclamos, por ejemplo, las 536 GD contenidas en la base representan un total de 2148 demandas. Los cuatro términos nativos más frecuentes en la documentación ilustran el cuadro general: *pago* (183 casos), *suspensiones* (126 casos), *despidos* (100 casos) y *categorías* (88 casos).

El vocablo *pago* engloba diversas situaciones que es imposible discernir con precisión. Existen en la base 49 oportunidades en que la fuente no brinda ninguna

información adicional. En los casos restantes sí lo hace, aunque de una manera asistemática que no permite un agrupamiento exhaustivo. Con todo, es posible señalar que al menos en 28 oportunidades las GD fueron originadas porque no se pagó el aguinaldo; en 22 por el atraso de las quincenas; en 21 por desconocer el salario mínimo vital y móvil; en otras 21 por descuentos indebidos motivados por el desconocimiento de enfermedades; y en 13 oportunidades porque no se otorgaron aumentos y retroactividades acordados en paritarias o sancionados por ley. La mayoría de estas demandas eran de tipo colectivo. Estos motivos no agotaban el stock de reclamos contenidos en el término *pago*, que abarcaba también la falta de reconocimiento de horas extras, el salario familiar o los distintos subsidios del convenio (servicio militar, matrimonio, etc.), entre otros menos frecuentes.

La categoría *suspensiones* no comprende, salvo contadas excepciones, suspensiones masivas de personal. Se trataba por regla general de sanciones que afectaban a un solo individuo. A veces intervenía la comisión interna y en otras la acción se originaba en el reclamo solitario del afectado. En solo 34 ocasiones es posible conocer el resultado obtenido por la GD: 23 fueron anuladas, ocho reducidas y las tres restantes mantenidas. Es probable que el destino del 75 % restante haya sido menos halagüeño, y por lo tanto, menos puntillosa la información ofrecida por la Secretaría de Organización. Similar era el caso de los *despidos*, que por lo general se limitaban a una o dos personas. Cuando los despidos eran masivos la respuesta habitual fue la huelga. La documentación permite conocer el resultado alcanzado por las GD de 61 casos. En 32 ocasiones se logró la reincorporación, en seis se reincorporó solo alguno de los involucrados, y en las restantes 23 los despidos se mantuvieron incólumes. Muchas veces lo que negociaba la FGB era, en realidad, la indemnización y, desde la sanción de la ley 18.596/70, la extensión del certificado de trabajo.

Finalmente, los informes no dicen nada sobre el destino de las GD concernientes a las *categorías*. Permiten entrever que en ocasiones se trataba de reclamos colectivos pero los datos que brindan son escasos. Esta demanda poseía un alto impacto salarial, que algunas empresas resistían, mientras otras simplemente dilataban para mantener deprimidos los costos laborales. Desde 1971, esta demanda se generalizaría en la industria hasta transformarse, como veremos más adelante, en el eje del plan de lucha de 1974.

El resto de los reclamos conformaba un universo heterogéneo que tendía a girar en torno a la violación de ciertos artículos del convenio colectivo de trabajo y de las leyes laborales. Las PT asoman como la vía más adecuada para explorar el problema. Al igual que las GD, cada PT solía encapsular múltiples reclamos. Es posible distinguir por su carácter endémico la demanda de ropa de trabajo (artículo 13 del convenio); 73 de las 229 denuncias registradas incluyen esta queja, presente igualmente entre los motivos de 43 GD. Jelín (1977) llamó la atención sobre este reclamo en los conflictos abiertos que registró entre octubre de 1973 y junio de 1974.

Más allá de esta curiosidad, lo que las PT ponen de manifiesto es la lucha constante de las y los trabajadores para que se cumpla el convenio colectivo de trabajo, incluso en sus aspectos básicos como, por ejemplo, los aumentos salariales acordados. Sumadas a la información que brindan las GD, las PT permiten corroborar la violación sistemática del articulado sobre jornada de trabajo en el sector obra, forma de pago, horas extraordinarias, bonificación por antigüedad, vacaciones y enfermedades inculpables. Aunque menos frecuente, alcanzaban asimismo a las condiciones de ingreso, la incompatibilidad, el suministro de leche (para paliar la contaminación con plomo), la jornada de trabajo en el sector periodístico, los cambios de tareas, la prohibición del trabajo a destajo, las ausencias voluntarias, los libros de reclamos, la promoción de los medio-oficiales y el escalafón de peones.

A su vez, las PT constituyen una excelente vía para aproximarse a las dificultades que enfrentaban las organizaciones de la clase obrera en la industria para que los talleres se ajustaran a la legislación laboral. La base contiene 40 actuaciones por el incumplimiento de la ley 18.596 de junio de 1970 que ordenó las modalidades del pago de sueldos (el tiempo, la forma y las certificaciones), un tema que figura de manera frecuente como motivo de disputa en las GD. Otras 40 fueron motivadas por el incumplimiento de la Resolución 42/71 que determinó los rubros sobre los que debían aplicarse los aumentos que se obtuvieran vía negociación colectiva. Finalmente, están los reclamos reiterados por el incumplimiento de la ley 33.302/45, habitual también en las GD analizadas, sobre la aplicación del salario vital mínimo (10 registros de APT y 21 de GD) y el aguinaldo (33 registros de APT y 28 de GD).

Estos ejemplos no agotan la cuestión. Las denuncias de la FGB comprenden un total de diecinueve leyes y decretos que cimentaban el piso legal mínimo de ciertas condiciones que, por lo general, también formaban parte de la negociación colectiva en la rama, a su vez, fruto de negociaciones al alza en las empresas cuyos trabajadores y trabajadoras contaban con mejores niveles organizativos. Las violaciones más comunes: el incumplimiento de la ley 11.544/29 sobre jornada de trabajo, la ley 18.610/70 sobre obras sociales, el desconocimiento de los aumentos salariales establecidos por el ejecutivo (por ejemplo, la ley 18.752/70, ley 18.886/70, el decreto/ley 19.220/71 y la ley 20.517/73).

Finalmente, las 57 actuaciones de la DGHyST sobre condiciones edilicias y laborales documentan otro de los frentes cotidianos de la guerrilla entre capital y trabajo durante el período. Todas corresponden a los años 1971-1973, salvo un registro de 1970. Refieren a la violación de los artículos 16 (limpieza locales), 43 (suministro de leche), 44 (baños, botiquín, guardarropas) y 45 (primeros auxilios) del convenio colectivo. La breve información contenida en las actas labradas por los funcionarios enriquece el panorama. A la falta de duchas, baños, guardarropas, vestuarios, se añadían las quejas por la deficiente iluminación y la necesidad de blanquear las paredes y los techos de los locales. Los funcionarios públicos exhortaban a los empresarios a colocar estufas para la adecuada calefacción de los talleres. Subrayaban la carencia de ventilación apropiada, o en su defecto, de extractores de aire, en lugares de trabajo amenazados por la contaminación con plomo. Muchas veces certificaban que secciones insalubres como tipografía y linotipia se encontraban sin separación alguna con otras secciones laborales, y que por lo tanto, compartían los riesgos sin el beneficio de un horario reducido o el suministro de leche. En dos casos excepcionales, llegaban a advertir sobre posibles derrumbes. Las GD contienen este tipo de reclamos en al menos 17 oportunidades. En conjunto, corresponden a 58 talleres, la mayoría pequeños *boliches*, es verdad, pero no todos, como lo atestiguan denuncias en Editorial Abril, Alemann, Crónica, IVISA, escenarios de importantes huelgas en aquellos años.

Los vacíos de la base impiden sacar conclusiones firmes de la comparación interanual de los guarismos. Con todo, la información recolectada sugiere la existencia de una marcada continuidad en los contenidos de las demandas y en el volumen de este compendio de acciones entre 1967 y 1975, con la parcial excepción del año 1974, cuando el



aumento de las AC durante el primer semestre podría deberse a la agudización de los enfrentamientos, a un cambio táctico de la Secretaría de Organización que replicaba la presión ministerial multiplicando sus denuncias, o al impacto de la ley 20.638 del 25 de enero que reafirmaba los mecanismos de arbitraje obligatorio de la Revolución Argentina. Su contracara: la caída abrupta de las AC durante 1975 bajo la conducción del SGA, en paralelo a la disminución de la caída de los conflictos abiertos en la rama. Su explicación seguramente debe incorporar otras variables, como la íntima relación existente entre la nueva conducción sindical y el Ministerio de Trabajo, pero también la desorganización gremial durante la transición y la consecuente carencia de información documental que acentúa la tendencia.

Como veremos en las secciones siguientes, distinto es el caso del comportamiento de las acciones directas, menos homogéneo, y cuyo volumen creció, por lo menos, hasta el último trimestre de 1974 junto a la demanda por la reclasificación y revalorización de las categorías que ocupó el centro de la lucha gremial en la rama desde principios de aquel año.

Toda esta actividad apenas visible en las fuentes más tradicionales insumía un tiempo enorme al gremio y concentraba la atención de los delegados de los talleres. Aunque atomizaban los recursos y expresaban la parcialización de facto de peleas por demandas comunes en la rama, eran el combustible básico y cotidiano de la organización en los lugares de trabajo. Más aún, estas acciones precedían en muchos casos a la elección de delegados y comisiones internas, lo que a su vez solía desencadenar prácticas patronales anti-sindicales alimentando así el conflicto. Esta última es una secuencia que se reitera en la documentación.

### *La acción directa en los lugares de trabajo*

El análisis cuantitativo de las interrupciones o mermas de la producción, ocasionadas por medidas de fuerza (desde el trabajo a reglamento y el corte de horas extras hasta huelgas y ocupaciones) muestra el crecimiento del número de acciones directas y de los talleres afectados. Esta afirmación elemental se apoya en la información incompleta pero concluyente recogida de una extensa gama de fuentes, que suma a las mencionadas, volantes, publicaciones partidarias del peronismo revolucionario y la izquierda, ocasionalmente diarios nacionales y para el caso de Fabril Financiera, documentación

empresaria. Se basa pura y exclusivamente en la cuantificación de las interrupciones y mermas de la producción ya que no es posible hasta el momento construir para el conjunto otro tipo de variables tales como duración, días perdidos, número de huelguistas, etcétera. Por ello, es imprescindible recurrir a metodologías cualitativas que complementen las básicas observaciones cuantitativas que sirven de punto de partida al análisis de esta sección. En síntesis, mientras que entre 1967 y 1970 identifiqué 13 medidas de fuerza, entre 1971 y el primer semestre de 1974, contabilicé 93. La periodización es arbitraria pero descriptivamente útil y puede justificarse por razones cuantitativas (el salto estadístico existente entre las seis huelgas del año 1970 y las 15 de 1971) y cualitativas (entre diciembre de 1970 y enero de 1971 se produjeron las dos primeras de las 24 ocupaciones fabriles documentadas). Aunque cubre unos pocos años, expresa dos momentos distintos, o si se quiere la transición de uno a otro. En el primero, se verifican acciones defensivas esporádicas, por lo general en grandes establecimientos, ante la continuidad de los ataques frontales a las fuentes de trabajo; en el segundo, un crecimiento de las medidas de fuerza originadas en agravios cotidianos del tipo de los descritos en la sección anterior. Por último, habría que agregar una tercera etapa, que inició el reconocimiento del SGA, en la que los conflictos abiertos disminuyeron.

Para contextualizar la primera etapa es necesario retrotraerse al golpe de 1955. Vía decreto, el gobierno militar conformó entonces la cadena ALEA mediante la confiscación de los diarios Noticias Gráficas, Democracia, Crítica, La Época y algunos otros de menor importancia (Correo de la Tarde, Pregón). Todos ellos quedarían pronto paralizados y sus planteles en la calle. En noviembre de 1966, cuando la Lista Verde de Raimundo Ongaro se impuso en las elecciones, este reclamo emparentaba la agenda de las distintas corrientes político-sindicales y sintetizaba el reclamo común por la creciente desocupación en la rama. A fines de los sesenta, nuevos cierres aumentarían las penurias de las trabajadoras y los trabajadores gráficos: diario El Mundo (confeccionado por Editorial Haynes), Kraft, Rayca. Sin contar el achicamiento de los planteles por los despidos graduales producidos en las fábricas.

Es este el marco de la huelga más prolongada del período que paralizó Fabril Financiera entre enero y abril de 1969. El desencadenante fue, precisamente, el despido de 47 trabajadores, entre ellos, los miembros del secretariado de la comisión interna y algunos

delegados. En realidad, la oposición a los planes de racionalización de la empresa más importante del sector ya había producido varias escaramuzas previas. Entre 1967 y 1968, los obreros y obreras de la planta habían cortado las horas extras durante ocho meses (*Partes Diarios*, 13-3-68 y 14-3-68, Fabril Financiera) y recurrido a la huelga contra despidos (*Documentación e Información Laboral*, 95, p. 16) y suspensiones de delegados (*Semanario CGT*, 14, 1-8-68). Y ya en las postrimerías de 1968, habían retomado el corte de horas extras en protesta por la anulación en la práctica del comedor obrero; la falta de reconocimiento y pago del día femenino, de los días por donación de sangre y de los días correspondientes a las enfermedades inculpables; la reducción de los premios; el retiro de la pizarra gremial; y la ausencia de sillas de la sección encuadernación (*Semanario CGT*, 37, 23-1-69; *Memoria y Balance*, 1968-69).

Desde su mismo inicio, tanto por izquierda como por derecha, fueron puestos en tela de juicio la oportunidad y causas del conflicto, la política de la FGB y la actuación personal de Ongaro (distintas evaluaciones en, por ejemplo: *Semanario CGT*, varios números, 1969; *Política Obrera*, varios números, 1969; *La voz de los gráficos*, Diario de la Agrupación Gráfica Peronista, Año I, n° 3, setiembre de 1971). Más allá de las desavenencias, retrospectivamente, el acontecimiento parece preanunciar un cambio en la actitud y la moral del gremio. Un año antes, cierres y despidos masivos como los de El Mundo y Kraft, apenas si habían encontrado respuesta. Para fines de 1969, en cambio, a pesar del aislamiento producido por la intervención de la FGB, el personal de Schcolnik recurría a la huelga para frenar los despidos y lo mismo hacían los trabajadores de Crónica, aunque sin éxito, a principios de 1970. En el mes de mayo, el *lock-out* de la empresa multinacional Lorilleux daba inicio a un largo y penoso proceso de movilización de los 83 despedidos ahora con el pleno respaldo del gremio otra vez en manos de la Lista Verde. Finalmente, en diciembre, un nuevo *lock-out*, esta vez del Establecimiento Gráfico Palermo, llevó a la primera toma del período y la puesta en funcionamiento de la planta; pocos días después, en enero de 1971, la historia se repetía en Códex. Estos dos acontecimientos demarcan el umbral de la segunda etapa en la que huelgas y ocupaciones irían en franco aumento.

La primera novedad que se desprende del análisis de las medidas de fuerza que tuvieron lugar entre 1971 y 1974 es que la mayoría emergieron de los agravios comunes en la rama ya descriptos, algunos casi endémicos, como el retraso en los pagos de las

quincenas y el aguinaldo, o el otorgamiento de categorías inadecuadas. Más aún, las huelgas se produjeron en empresas con un consistente historial de gestiones directas y audiencias de conciliación motivadas, precisamente, por iguales demandas, que se remontaba por lo menos a 1967. Ya en 1971 este era el caso de Rotog-Arg, Cotel y Zeballos, Talleres León y Marruccelli. La tendencia se consolidaría en años subsiguientes. Algo similar comenzaba a ocurrir, aunque más gradual y esporádicamente, frente a los despidos individuales y las suspensiones arbitrarias.

La otra novedad es el incremento de las huelgas a causa de los ataques patronales a la organización en los lugares de trabajo. Las dinámicas son diversas pero el objetivo siempre el mismo. Prevalecen dos situaciones. Por un lado, el despido de los promotores de la organización interna de talleres, por lo general, pequeños. Entre 1972 y 1974, pude detectar 23 asambleas convocadas para organizar el taller y elegir delegados, que son el resultado de procesos de movilización originados en demandas cotidianas. Por el otro, el hostigamiento y despido de los miembros de comisiones internas ya establecidas. Prensa Médica conjuga ambas situaciones e ilustra el cambio de clima. Mientras que en 1968 la incipiente organización interna fue abortada con el despido de los flamantes delegados sin reacción alguna de sus casi 100 trabajadores, cinco años más tarde el simple acoso a la comisión interna motivó la ocupación del taller. Más excepcional es el caso de la Editorial Abril, una empresa con más de 600 trabajadores que decidió desconocer a la comisión interna, encontrando una tenaz resistencia que incluyó una breve toma de la planta en agosto de 1973.

La tercera novedad fue la masiva ocupación de talleres de los más diversos tipos: encuadernación, editoriales, imprentas, diarios, flexografía. Desde pequeños como ARP (20 trabajadores) o Fumagalli (35 trabajadores) hasta grandes establecimientos con plantillas de varios cientos de obreros como la recién mencionada Editorial Abril o Códex. Algunas, incluso, fueron coronadas por la puesta en funcionamiento de la planta y la producción de revistas, cuadernos, envases. Otras, incluyeron el pedido de nacionalización (exitoso en Códex, frustrado en Lamson Paragon y Oucinde) o la formación de cooperativas.

Las primeras ocupaciones fueron reacciones defensivas desde abajo ante el vaciamiento empresario (Códex, Lorilleux, Gráfica Palermo, Fumagalli). Las últimas, del año 1974, aunque también dinamizadas desde abajo ante las amenazas de cierres (Oucinde,

Lamson Paragon), confluían con la ofensiva contra el Pacto Social promovida desde arriba por la Lista Verde. Entre 1972 y 1973, en cambio, las ocupaciones se originaron en los más diversos motivos y contextos: la suspensión de compañeros, el atraso en los pagos, la violación sistemática del convenio colectivo, el ataque a una comisión interna. Una vez más, la mayoría de estos casos fueron protagonizados por colectivos obreros que en años previos habían vehiculizado demandas similares a través de gestiones gremiales, denuncias a la Policía del Trabajo y audiencias de conciliación, sin recurrir más que ocasionalmente a la acción directa.

La tercera etapa que comienza a finales de 1974 se distingue por el retroceso de los conflictos en los lugares de trabajo. El primer indicador es el fin de las ocupaciones fabriles en la rama, o casi; en realidad, en octubre de 1975 se produjo una toma de hecho en Artes Gráficas Crufer, que la documentación nomina como asamblea permanente en el lugar de trabajo. La misma duró por más de una semana, en respuesta al despido de tres operarios, y contó con el apoyo logístico del SGA, que proveyó comida y atención médica, mientras evitaba definirla como una ocupación. Las fuentes no señalan si los trabajadores permitieron a los directivos y supervisores el ingreso a la planta. Pero fue una excepción. La cadena de ocupaciones se había detenido ya para agosto de 1974 coincidiendo en la industria con el retiro de la personería gremial, pero expresando una situación más general tal como se desprende del estudio de Jelín (1977). El segundo indicador lo constituye la caída del número de acciones directas. Las causas de esta desaceleración de la conflictividad en la rama quedarán más claras en la próxima sección.

#### *Las acciones colectivas de las trabajadoras y trabajadores gráficos a nivel de rama*

Hasta aquí, el estudio se concentró en la conflictividad latente y abierta en las empresas. Es el turno de analizar los conflictos generales de la rama.

Son 35 los eventos documentados: la mayoría huelgas generales, pero también interrupciones parciales de algunas horas por turno y acontecimientos imposibles de conmensurar como las medidas de fuerza contra el retiro de la personería gremial y la intervención, o las jornadas de junio y julio de 1975 (Cotarelo & Fernández, 1998; Löbbecke, 2006). Las huelgas generales se dividen entre las de orden nacional o las restringidas al área de Capital Federal y municipios vecinos, las primeras, sobre todo, producto de las huelgas

nacionales convocadas por la CGT de los Argentinos y la CGT Azopardo. Las huelgas parciales adoptaron, por su parte, una de dos modalidades: paros simultáneos o interrupciones escalonadas según zonas a lo largo de varios días.

Fue excepcional el caso en que un conflicto de empresa derivara en una acción del conjunto del gremio, como ocurrió en el paro general del 11 de abril de 1969 en solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Fabril Financiera. O como la huelga de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta (FATI) del 30 de abril del mismo año, entre cuyas demandas principales figuraba la apertura de las paritarias pero cuya oportunidad estuvo ligada al conflicto de Fabril. O el paro parcial con movilización de finales de 1975 en solidaridad con los despedidos de la empresa La Ley. Quizás habría que añadir a la lista las convocatorias de mayo de 1974 y febrero de 1976. Pero ambos paros generales fueron finalmente levantados. El primero, en solidaridad con los despedidos de IVISA, ante la inmediata reincorporación y el pago de los salarios caídos; el segundo, en el marco del prolongado conflicto con La Ley, luego de una reunión con el Ministro de Trabajo Miguel Unamuno.

El análisis de las acciones colectivas emprendidas por el conjunto de los trabajadores de la industria ilumina aspectos que la investigación sobre los conflictos y huelgas en los lugares de trabajo deja en la oscuridad.

En primer lugar, se observa que a fines de 1970, la conducción del gremio aún encontraba dificultades para garantizar los paros nacionales. En especial, la imposibilidad de evitar la aparición de los principales diarios atenuaba el impacto del paro en la rama y desmoralizaba a los delegados. Más grave aún fue la eventual deserción de grandes fábricas, como el caso de Fabril Financiera en la huelga del 9 de octubre de 1970.

Pero además, la prédica anti-burocrática caló hondo y se convirtió en un bumerán luego de la intervención de la CGT de los Argentinos. Eran comunes las voces contrarias a participar en las huelgas generales convocadas por la CGT Azopardo, sobre todo, luego de la súbita cancelación del paro de 36 horas programado para el 1° de octubre de 1969. Para disipar la desconfianza, la CGA decidió sumarse en adelante a los paros de la CGT Azopardo con un programa propio, aplicando métodos de acción directa y legitimando la decisión mediante el voto de los delegados.

Justamente, los plenarios de delegados que ratificaron la participación en los tres paros generales de octubre y noviembre de 1970 ilustran el estado de situación del gremio a principios de la década. Contaron con representantes de 75 comisiones internas, prácticamente la totalidad de las efectivamente organizadas y activas en ese momento (*El Obrero Gráfico*, 487, octubre-noviembre de 1970, pág. 26). El dato pone en evidencia el notorio crecimiento organizativo experimentado por el gremio desde fines de 1966 cuando el paro general de diciembre pasó casi inadvertido en la industria ante la impotencia de la flamante conducción peronista. Pero expresa una persistente debilidad si consideramos las 527 empresas registradas en la base de datos en que se apoya la investigación. Además, las intervenciones de los delegados reproducidas en la revista del gremio muestran la incertidumbre de varios sobre la disposición huelguística en sus talleres y la desigual organización en el sector diarios.

En cambio, los paros nacionales de la CGT Azopardo de 1972 y 1973 encontraron a un gremio robustecido y dispuesto, correlato del fortalecimiento organizativo. A principios de 1971 fuentes gremiales hablaban de 120 comisiones internas organizadas (“Gráficos: una experiencia”, *El Obrero Gráfico*, n° 488, enero-febrero de 1971), en 1973 hubo elecciones de comisiones internas en 204 talleres (*Memoria y Balance*, Federación Gráfica Bonaerense, 1973, pág. 200-201), proceso que se acentuó a lo largo de 1974 con la organización de 35 nuevos talleres en los primeros meses del año (*El Obrero Gráfico*, 501, junio de 1974), y eran 254 los talleres que componían el listado de las seis zonas en que se dividía el gremio en junio del mismo año (*Federación Gráfica Bonaerense*, s/n, 1974). Datos diversos pero que apuntan todos en la misma dirección.

Fue sobre esta red organizativa que se asentó el proceso de movilización obrera más importante de la época en la industria gráfica, ligado a las contradicciones derivadas de la particular configuración en la rama del antagonismo estructural entre capital y trabajo, y cuyo canal de expresión fue, inicialmente, la negociación colectiva. Si en la base de la disputa se encontraba el cambio tecnológico, la virulencia del enfrentamiento solo encuentra explicación si incorporamos al análisis, variables de tipo político.

La firma del convenio colectivo de 1950 había definido, por primera vez en la industria, un cuadro clasificatorio común de ramas y categorías. Coronación de una larga lucha gremial, el acuerdo encerraba una paradoja: reflejaba fielmente las demandas obreras

históricas correspondientes a una base técnica que estaba por sufrir cambios profundos (Ghigliani, 2013). Rápidamente, el surgimiento de nuevas ramas como flexografía, formularios continuos o composición en frío lo tornaron obsoleto. Para finales de los sesenta, tres mil obreros de la industria quedaban directamente fuera de convenio y las categorías existentes no se adecuaban con facilidad a la acelerada renovación tecnológica (Ghigliani, 2014).

La reapertura de las negociación colectiva de 1971 desnudó el desfase. La última renovación de 1967 se había restringido una vez más, como todas desde 1950, casi exclusivamente a la cuestión salarial. En 1969, la FATI elevó un petitorio que incluía modificaciones del reglamento y del cuadro clasificatorio, pero la patronal lo rechazó escudándose en las prórrogas de renovación automática decretadas por el gobierno militar. La negativa motivó dos huelgas nacionales del sector ignoradas por la dictadura. Así, la propuesta elevada por el gremio actualizó las desavenencias que en un comienzo encontraron cauce dentro del marco institucional de las paritarias, separando la negociación salarial del tratamiento de las condiciones laborales y los nuevos cuadros clasificatorios.

Para mediados de 1973, la lucha por la renegociación del convenio que arrastraba el gremio desde hacía ya más de dos años confluyó con el rechazo a la política de compromiso tripartito del gobierno peronista. Setiembre fue el mes clave. La dilatada propuesta patronal respecto a la clasificación de las nuevas ramas y la nueva maquinaria fue rechazada por las asambleas obreras de los sectores afectados dando comienzo al corte de las horas extras, al tiempo que la FGB se convertía en el primer sindicato en denunciar un convenio colectivo de trabajo desde la puesta en marcha del Pacto Social.

A partir de allí se inician una serie de acciones colectivas, en un principio restringidas a los sectores afectados, que torcieron el brazo de los empresarios de las nuevas ramas, y pavimentaron el camino del plan de lucha por la reclasificación y revalorización de tareas del conjunto de la industria, ratificado en marzo de 1974 por el voto de la asamblea general del gremio. Se trataba de un abierto desafío al Ministerio de Trabajo que venía presionando a los gremios de gráficos y prensa desde el paro general conjunto del 11 de enero que por primera vez en 15 años había impedido la salida de los diarios (*El Trabajador de Prensa*, 4-2-74, p. 4). Con esta decisión, la asamblea fundió los objetivos gremiales y los políticos acelerando el conflicto.



La FGB se encontró así en una situación ambigua: mientras comenzaba a imponer sus demandas gremiales en las nuevas ramas, el plan de lucha agudizaba el enfrentamiento político con el gobierno. En especial, por el tenor de los reclamos: por un lado, la reducción del número de categorías y el ascenso generalizado del personal de la industria; por el otro, la actualización de los valores de cada una de las diez categorías propuestas.

Entre enero y junio, el gremio se sumergió en una intensa agitación del programa de reivindicaciones que desató una ola de conflictividad en los talleres durante el primer semestre de 1974; paralelamente, organizaba la lucha por la apertura de las paritarias y se preparaba para resistir una eventual intervención. Demandas que en el pasado transitaban carriles institucionales provocaban ahora la movilización y la acción directa. En particular, en las ramas flexografía y formularios continuos, que habían alcanzado altos niveles de organización durante la pelea por su reconocimiento en el convenio colectivo de trabajo. Muchas compañías del sector se negaban a pagar las nuevas categorías; algunas incluso, amenazaron cerrar sus puertas (Verlini, Lamson Paragon, Oucinde) y se encontraron con la ocupación como respuesta.

Este es el clima que precede la asamblea del 26 de junio, uno de los hitos de la historia política del gremio. La CGA se dividió públicamente entre *ongaristas* y aquellos que se oponían a votar un plan de lucha en nombre de la defensa del proyecto nacional y la lealtad a Juan Domingo Perón. Aunque en franca minoría, los últimos contaban con el apoyo de comisiones internas y delegados de fábricas importantes. En algunas de ellas, incluso, habían obtenido ya parcialmente las demandas mediante negociaciones directas con la patronal. Es probable que estos logros no fueran casuales y que se tratara de una política empresarial dirigida a debilitar al sector más combativo. Reforzaban los argumentos de los líderes de la ruptura quienes presentaron la renuncia a sus cargos denunciando que las tácticas del ongarismo ponían en riesgo al gremio, que el camino era la negociación y que exigían el ingreso a las 62 Organizaciones y la CGT. La inmensa mayoría de los asambleístas, sin embargo, apoyó el plan de lucha desafiando la última de las intimaciones del Ministerio por “abierta violación al Pacto Social, el Acta de Compromiso Nacional y al decreto 901/73” (*Documentación e Información Laboral*, 173, julio de 1974, p. 1/281).

El plan de lucha disponía el inmediato quite de colaboración y el corte de horas extras; convocaba a la realización de asambleas durante las 24 horas del 1ro de julio; y

finalmente, a asambleas de dos horas por turno a partir del día cuatro, escalonadas según las ocho zonas en que se había dividido el gremio, en las que los delegados, fieles a una vieja práctica del gremio, leerían a sus representados las resoluciones del 26 de junio, para acto seguido, entregárselas en mano a la patronal. La muerte de Perón alteró los planes.

A mediodía del primero, la CGA levantó las asambleas y ordenó el control obrero de los diarios para asegurar que las ediciones se limitaran pura y exclusivamente a la cobertura del deceso y se abstuvieran de publicar otras noticias, avisos y publicidades (*La Nación*, 2-7-74; *Forma en que se editarán los diarios a fin de manifestar el duelo del gremio gráfico, solicitada*, FGB, 1-7-74; *Avanzada Socialista*, 110, 1974, p. 11, “Impusieron el control obrero en la edición del martes”). El Ministro de Trabajo Ricardo Otero no se conmovió con el gesto y aprovechó la ocasión para lanzar el contraataque. A menos de una semana del fallecimiento de Perón, intimó nuevamente a la FGB, que a su vez, reanudó el plan de lucha dos semanas más tarde. A partir de ese momento y hasta entrado setiembre, la conflictividad se instaló en la rama de manera casi ininterrumpida, antes y después de la anunciada cancelación de la personería acaecida finalmente el día 19 de agosto, a partir de la combinación de cortes de horas extras, paros rotativos y paros generales.

Pero la ruptura de la CGA trajo aparejadas las primeras deserciones: Fabril Financiera, Heliograf y Rotog Arg, y miembros de las comisiones internas de Editorial Códex, Editorial Atlántida y Platt (*Resumen de la Resolución adoptada por la Comisión General Administrativa separando de nuestro gremio a elementos patronales y carneros*, FGB, s/f). Pronto se les sumaron renombrados talleres como Estrada, Bianchi o Boletín Oficial (ver *Al gremio gráfico*, solicitada publicada 9 de octubre de 1974). De este grupo emergió el núcleo que junto a los ex dirigentes de la FGB dieron vida al embrión del futuro SGA. Hasta mediados de setiembre, sin embargo, el activismo de las nuevas ramas, y en especial, la organización y el apoyo del sector periodístico garantizó el impacto de las medidas al impedir la salida de varios de los diarios de mayor tirada. Pero las defecciones, la represión estatal en franco aumento desde principios de año, las represalias patronales, el reconocimiento ministerial del nuevo sindicato, fueron generando el inevitable desgaste de la base gremial. Con todo, la cancelación de la personería jurídica en octubre enfrentó un paro general y la conducción clandestina lanzó un nuevo plan de lucha en noviembre. Considerando las condiciones adversas, el acatamiento fue elevado, pero ya si,

inevitablemente parcial e impotente frente a la ofensiva gubernamental y la recomposición de la dirigencia oficialista.

En cierta forma, octubre marcó el pasaje a la tercera y última etapa previa al golpe. El retroceso de la conflictividad en los lugares de trabajo durante 1975 tuvo su correlato a nivel de rama. El moderado repunte de los conflictos laborales que observó Jelín para principios de año no tuvo correlato en la industria gráfica. En lo que respecta a las acciones colectivas a nivel de rama, son solo dos las documentadas. La primera, los días 7 y 8 de julio, cuando las trabajadoras y trabajadores gráficos concurren a la huelga junto al resto del movimiento obrero argentino. No dispongo de información detallada para evaluar su alcance. El personal del diario *La Nación*, por ejemplo, dónde continuaban vigentes los lazos establecidos por la Intersindical con trabajadores de prensa formada a finales de 1973, aprovechó la ocasión para reivindicar a la FGB (*A la clase obrera y al pueblo*, solicitada, Personal Gráfico y de Prensa de *La Nación*, 6-7-75) y pedir la liberación de Ongaro, preso desde el 30 de octubre de 1974 (*La Calle*, 31-10-74). Es probable que no fueran los únicos en ligar el presente con el pasado inmediato y exigir la libertad de Ongaro; aunque es cierto también que la organización de base de *La Nación* se distinguió del resto por mantener altos niveles de movilización y combatividad hasta el golpe de 1976. La segunda, se produjo entre fines de octubre y principios noviembre, como parte de un plan de lucha por los 120 despidos de Editorial La Ley, que empezó con paros de una hora por turno y corte de horas extras y terminó el día 7 de noviembre con un paro de cuatro horas y movilización al Ministerio de Trabajo. Un tercer intento, por el mismo motivo, en febrero de 1976, no llegaría a concretarse.

El *ongarismo* desplazado, por su parte, mantuvo una organización clandestina, desechó sumarse a una alianza electoral con otras agrupaciones de base y optó por la abstención. Alcanzó un razonable nivel de actividad hasta por lo menos marzo de 1975, eligió autoridades internas y editó varios panfletos y documentos. Pero la consolidación del SGA y la reapertura de las paritarias socavaron su militancia. El último registro encontrado de la actividad del grupo es un panfleto de octubre de 1975, que llamaba a asambleas en todos los talleres para denunciar a las patronales y la complicidad del SGA, como parte de una Jornada de Lucha y de Denuncia de la Situación del Gremio en el primer aniversario de la liquidación de la FGB. La calidad del impreso habla por sí solo del deterioro de las

condiciones de reproducción de la antigua Lista Verde; desconozco la suerte de la iniciativa pero no hay duda de que carecían ya del poder necesario para interrumpir la producción en la rama.

### *Conclusiones*

El estudio de las confrontaciones cotidianas en los lugares de trabajo reveló el sustrato sobre el que se afirmaba en la época la organización y la lucha obrera en la industria. Aunque mezquinos, los datos que ofrecen los informes de la Secretaría de Organización alumbran la lucha constante entre capital y trabajo por controlar las condiciones de compra y consumo productivo de la fuerza de trabajo. Con sus vaivenes, difíciles de evaluar dados los vacíos en la información y los avatares de la historia político-sindical de esos años, la mayor uniformidad encontrada en este nivel subterráneo contrasta con las notorias variaciones sufridas por los conflictos abiertos, lo que insinúa que la derrota del *ongarismo* no pudo ser trasladada a las plantas en idéntica proporción, por lo menos, hasta el golpe de estado de 1976.

Este nivel analítico permitió, a su vez, corroborar la distancia existente en la fecha entre la letra de los convenios colectivos y las leyes laborales y la variopinta realidad de la explotación. Queda claro que sin organización no había convenios ni leyes que valgan, y con organización, solo a duras penas. Como beneficio secundario, conflictos inopinados encontraron en estos escuetos informes retazos de sus historias particulares recobrando la temporalidad perdida por falta de documentación.

A su vez, el estudio de los conflictos abiertos en la industria previene contra miradas demasiado lineales. Está claro que no puede desligarse de la evolución de la conflictividad del conjunto de la clase obrera. Pero su intensidad distingue al caso e invita a reflexionar sobre sus causas.

En primer lugar, no parece posible establecer direccionalidades unívocas en el impulso combativo. El papel del liderazgo gremial es indudable, pero también, que encontraba un eco renovado en los lugares de trabajo. La huelga en Fabril Financiera testimonia las tensiones que esta situación producía. El paro fue una decisión autónoma de la fábrica, frente a un atropello que no dejaba muchas alternativas, bajo la conducción de una comisión interna que se identificaba con la conducción de la FGB, pero que solo unos

meses antes dudaba sobre la capacidad de reinstalar el corte de horas extras, según se desprende de los informes que elevaban a la oficina de Recursos Humanos los soplonos de la empresa (ver *Informes*, Fabril Financiera). Luego, la ratificación del paro a lo largo del conflicto enfrentó una corriente de opinión contraria que se expresaba en intervenciones aisladas de dirigentes opositores desprestigiados que no concitaban la adhesión de las asambleas. Pero tenía su peso, e incluso puertas adentro, dividió las aguas de la Lista Verde, como dividió a los trabajadores sin llegar por ello a resquebrajar seriamente la disciplina sindical. La continuidad de la huelga fue el resultado de una decisión de la CGA que encontró apoyo entre los trabajadores. La derrota tuvo un impacto paralizador en la fábrica y no fue ajena al desprendimiento de un sector de la Lista Verde que en nombre del *verdadero* peronismo formó una nueva agrupación gremial. Sin embargo, el Cordobazo y la intervención del gremio luego de la ejecución de Augusto Vandor cancelaron el debate previniendo toda posibilidad de que el pesimismo de Fabril se contagiara al resto de los talleres. Más aún, fortalecieron, aunque por distintos motivos, las conclusiones combativas que bajaban de la conducción desplazada.

Las ocupaciones, por el contrario, expresan más claramente el impulso desde abajo. Las tomas de Establecimiento Gráfico Palermo y Códex, las dos primeras de una larga serie, fueron decididas por sus trabajadores. Sólo después encontraron apoyo en algunos integrantes claves de la Secretaría de Organización, mientras que fueron recibidas con poco entusiasmo por los altos dirigentes del gremio. Por ello, la propagación de las ocupaciones parece más el resultado de la imitación que el efecto de una política gremial deliberada. Los motivos, los contextos y los resultados fueron diversos; alcanzando incluso a talleres sin organización previa. En cambio, entrado el año 1974, aunque las fuerzas motoras, en principio, siguieron emanando de los talleres, la FGB blandía abiertamente la amenaza de la ocupación. Sobre todo en las plantas de más reciente organización, muchas de ellas pertenecientes a las nuevas ramas, que se convirtieron en la base de apoyo de la Lista Verde cuando comenzaron las deserciones de importantes fábricas. Como adelantamos, las dos empresas en las que estallaron los conflictos más resonantes de la época, Fabril Financiera y Códex, fueron puntales del bando moderado en 1974. Comisiones internas muy activas en años previos, también. Dilucidar este comportamiento requiere un grado de detalle que excede los objetivos del capítulo. En el caso de Fabril, la derrota de 1969 es una variable

clave; para el resto, no debe desdeñarse el papel jugado por el recelo de dirigentes, delegados y obreros, a enfrentarse a un gobierno al que sentían como propio. Sin olvidar que el Ministerio de Trabajo hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el balance de los costos y beneficios del plan de lucha de 1974 diera un saldo negativo. Por el contrario, empresas del sector periodístico tradicionalmente esquivas, entre las que se destaca *La Nación*, se mantuvieron fieles a la Verde hasta el final y solo la dictadura pudo acabar con su organización, y solo temporalmente.

Por último, el análisis de las medias de fuerza sostenidas por el conjunto de las y los trabajadores de la rama mostró que las instituciones de la negociación colectiva fueron la base de la fusión de las demandas gremiales y las políticas. El Pacto Social vino a interferir un proceso de movilización en marcha. Casi simultáneamente a su implementación, las nuevas ramas lograban no solo el reconocimiento sino también un cuadro reducido de categorías que anticipaba el objetivo general de la FGB para la renegociación del convenio. El *ongarismo* encontró allí el contenido gremial para la lucha política contra el rumbo que tomaba el gobierno de Perón. Los dirigentes del SGA, en cambio, deshicieron esta ecuación. Pusieron en primer lugar la defensa del gobierno, mientras alentaban a las comisiones internas a la lucha seccional por el programa de conquistas. Varias grandes fábricas cedieron. Al año siguiente, la articulación de variables gremiales y políticas durante la negociación colectiva, aunque ya con un contenido distinto, alcanzaría al gremio desde afuera durante el movimiento huelguístico de junio y julio de 1975. Para esta altura el gremio había perdido fuerza y protagonismo.

### *Bibliografía*

- Campos, L. (2008). *Estado y sindicatos: un análisis de sus relaciones a partir de los mecanismos de regulación y la conformación de la estructura sindical en Argentina (1943 – 1988)*. Tesis de Maestría, Flacso, Argentina.
- Cotarelo, M. C. & Fernández, F. (1998). Lucha del movimiento obrero en un momento de crisis de la sociedad argentina, 1975-1976. *Razón y Revolución*, 4, Buenos Aires.

- Dawyd, D., & Nassif, S. (2013). Fuentes para el estudio del movimiento obrero: El Servicio de Documentación e Información Laboral (DIL), dirigido por Leonardo Dimase (1960-1976, 1982-1989). *Corpus. Archivos Virtuales de La Alteridad Americana*, 3(2). Retrieved from <http://corpusarchivos.revues.org/604>
- Ghigliani, P. (2014). *Proceso de trabajo, organización industrial y movilización obrera en la industria gráfica (1950-1975)*. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Ghigliani, P. (2013). *Organización de la industria gráfica y conflictividad laboral (1940-1960)*. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentales de Historia, Mendoza.
- Ghigliani, P. (2009). Acerca de los estudios cuantitativos sobre conflictos laborales en Argentina (1973-2009): reflexiones sobre sus premisas teórico-metodológicas. *Conflicto Social*, 2(2).
- James, D. (1990). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Jelín, E. (1977). Conflictos Laborales en la Argentina, 1973-1976. *Estudios Sociales*, 9, CEDES.
- Izaguirre, I. & Aristizábal, Z. (2000). Las luchas obreras 1973 – 1976. *Documento de Trabajo*, 17, Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA).
- Löbbecke, H. (2006). *La guerrilla fabril*. Buenos Aires: Razón y Revolución.
- Nievas, F. (1999). Cámpora: primavera – otoño. Las tomas. En Alfredo Pucciarelli (ed) *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*. Buenos Aires: Eudeba.
- Schneider, A. (2006) *Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973)*. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.
- Torre, J. C. (1983). *Los sindicatos en el gobierno 1973-1976*. Buenos Aires: CEAL.

- Velden, J. H. A. van der. (2007). *Strikes around the world, 1968-2005: case-studies of 15 countries*. Amsterdam: Aksant.
- Werner, R. & Aguirre, F. (2007). *Insurgencia Obrera en la Argentina. 1969-1976. Clasismo, coordinadoras fabriles y estrategias de la izquierda*. Buenos Aires: IPS.